

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada

Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia

Señor

Juez Administrativo (REPARTO)

DISTRITO JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA

E.S.D.

REF.:	ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
DE:	RUTH PATRICIA MONROY MOLANO
CONTRA:	LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

ANA YENSY SALGADO BEDOYA, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 38.756.340 de Sevilla (Valle), abogada en ejercicio e inscrita con la Tarjeta Profesional número 168.031 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO mayor de edad y vecina de esta ciudad, respetuosamente manifiesto que en ejercicio de la Acción de Reparación Directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito instaurar DEMANDA DE REPARACION DIRECTA en contra de LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION representada por el señor Fiscal General de la Nación Doctor LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, o por quienes hagan sus veces o los reemplace, para que previos los trámites del Proceso Contencioso Administrativo surtido con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio público, en sentencia definitiva se hagan las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS.

PRIMERA.- Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la NACION – RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, por los perjuicios materiales y morales, actuales y futuros, subjetivos y objetivados respectivamente, causados a la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, debido a la incautación de la embarcación “DON EMILIO” la cual fue entregada posteriormente en un estado de deterioro lamentable.

SEGUNDA: Condenar en consecuencia a LA NACION, RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION, como reparación al daño ocasionado, a pagar al demandante o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios materiales y morales, actuales y futuros, subjetivos y objetivados respectivamente, cuya cuantía se

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

estima en doscientos cuarenta y ocho millones de pesos (\$248.000.000) moneda legal, de acuerdo a la liquidación realizada en el acápite que trata de la estimación razonada de la cuantía, o conforme a lo que resulte probado en el proceso.

TERCERA: Sobre el total de las sumas que correspondan a favor de los demandantes, deberá liquidarse la indexación y respecto de los perjuicios morales se tendrá en cuenta la certificación del DANE, sobre el índice de precios al consumidor.

CUARTA: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 C. P. A. C. A.

QUINTA: Que se me reconozca personería para impetrar la presente demanda, y de la misma manera dentro de la sentencia que ponga fin a las pretensiones.

SEXTA: Condenar en costas a las entidades demandadas.

HECHOS

PRIMERO: El día 22 de agosto del año 2003 una persona al parecer anónima suministro a la policía del municipio de Buenaventura la información q en la calle 7 No. 29 – 91 del Barrio el Kilometro se estaban realizando actividades ilícitas consistentes en tráfico de estupefacientes

SEGUNDO: La policía se dirigió a la dirección anteriormente mencionada, donde estaba una ubicada la bodega y al ingresar a dicho lugar incautaron una sustancia alucinógena.

TERCERO: Dentro de la diligencia judicial, se encontró que dicha sustancia alucinógena, estaba dentro de la embarcación DON EMILIO de propiedad de la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, la cual al parecer había sido introducida allí, por el vigilante o propietario de la bodega.

CUARTO: la embarcación DON EMILIO fue incautada por las autoridades respectivas y llevada a la sede de policía de Buenaventura, de la investigación

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

conocía la Fiscalía segunda Especializada de Buenaventura y posteriormente se remitió dicha investigación a la Fiscalía quinta delegada ante los juzgados penales del circuito especializados de Buga - Valle.

QUINTO: La embarcación DON EMILIO, se encontraba en la bodega objeto del allanamiento, bajo el contrato de aparcamiento, lo cual quedo probado con los recibos que se allegaron a la investigación seguida por la Fiscalía.

SEXTO: El día 23 de septiembre de 2003 la señora RUTH PATRICIA MONROY confirió poder al Dr. Aroldo de Jesús Amaya Chaverra a fin de que realizara las diligencias pertinentes para obtener la entrega provisional o definitiva de la lancha "Don Emilio", dicho poder se allego a la fiscalía el día 3 de octubre de 2003.

SEPTIMO: El día 29 de septiembre de 2005 la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO solicita por medio de escrito la entrega definitiva de la motonave adjuntando los recibos de parqueo que pagaba mensualmente para que guardaran y cuidaran de dicha embarcación, así como los documentos que la acreditaban como su propietaria.

OCTAVO: Posteriormente la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO nombró como representante dentro de dicha investigación a la Dra. Carolina Velásquez de la Cruz el día 13 de diciembre de 2007 y el poder se allego a la fiscalía el día 31 de enero de 2009, a fin de que la representara para lograr la entrega de la embarcación.

NOVENO: mediante resolución de sustanciación del veintiséis (26) de febrero de 2008 la Fiscalía General de la Nación específicamente la Fiscalía Quinta Especializada de Guadalajara de Buga expone que se hace necesario escuchar en ampliación de declaración a la señora Ruth Patricia Monroy Molano toda vez que existe memorial suscrito por la misma solicitando la entrega de la motonave.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

DECIMO: el día marzo 12 de 2009 la representante de la señora Ruth Patricia Monroy molano Dra. Carolina Velásquez de la Cruz, solicitó nuevamente la devolución del bien a fin de que cesara la causación de daños y perjuicios al patrimonio de la afectada.

DECIMO PRIMERO: por medio de resolución del 1 de marzo de 2010 la Unidad de Fiscalías Especializadas negó la entrega de la embarcación DON EMILIO a su propietaria puesto que la firma Fibremos del señor Nicolás Bolívar Guerrero que fue quien elaboró el bote como figura en la factura de venta, no relacionó la construcción de dicho Bote DON EMILIO, pues argumentó no recordar haberlo fabricado, motivo por el cual dispone recibir una declaración del señor Guerrero para ponerle de presente la factura aportada por la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, a fin de determinar si el documento es autentico o no. Asi mismo dispone una inspección judicial a la embarcación que para ese entonces se encontraba inmovilizada en las instalaciones de la Estación de Policía Cascajal en Buenaventura para efectos de establecer su estado.

DECIMO SEGUNDO: el día 29 de marzo de 2010, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, COMANDO OPERATIVO ESPECIAL BUENAVENTURA, solamente se limitó a contestar al señor Fiscal Quinto Especializado de Buga, que la lancha se encuentra en el parqueadero de comando de Estación de Policía Cascajal de Buenaventura y solicita se informe en qué lugar puede ser entregada.

DECIMO TERCERO: el día 22 de abril de 2010, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, COMANDO OPERATIVO ESPECIAL BUENAVENTURA, emite exactamente el mismo comunicado que se nombra en el hecho anterior solicitando nuevamente al señor Fiscal Quinto Especializado de Buga se sirva indicar el lugar de entrega de dicha lancha.

DECIMO CUARTO: en diligencia de inspección judicial llevada a cabo por la fiscalía 41 delegada ante los juzgados penales de circuito de Buenaventura Valle, el día 26

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

de abril de 2010 se traslado el despacho a las instalaciones de policía de Cascajal y describió que “la lancha se encontraba ubicada en la parte trasera, en una zona verde, la cual se encontraba bastante boscosa, inundada en algunos sectores y abandonada, la embarcación DON EMILIO, donde por estos factores ya mencionados no se pudo acercar a dicha motonave para constatar y verificar todos los requerimientos solicitados”, e indican que lo que si se pudo observar y verificar fue que la embarcación DON EMILIO se encontraba en un pésimo estado de conservación y que ni siquiera se pudieron tomar las medidas y el número de serie debido a que no fue posible acercarse a la misma.

DECIMO QUINTO: posteriormente la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO confirió poder al Dr. Iván Darío Díaz Naranjo para que la representara y solicitara de igual forma la entrega de la lancha ya sea de forma provisional o definitiva.

DECIMO SEXTO: por medio de resolución de fecha 4 de junio de 2010 se dispone la entrega en provisionalidad de la lancha DON EMILIO a su propietaria mientras se seguía el ciclo investigativo en contra de los verdaderos autores del hecho punible, en esta resolución se confirma que en acta de inspección a la embarcación se constata que está en mal estado de conservación y de abandono en la sede del departamento de policía de Buenaventura.

DECIMO SEPTIMO: El día 23 de junio de 2010, por medio de despacho comisorio numero 018, la Fiscalía Quinta Especializada de Guadalajara de Buga hace saber al señor fiscal 41 seccional delegado ante los Juzgados Penales del Circuito de Buenaventura Valle, que se ha proferido resolución que en parte pertinente dice: disponer la entrega en provisionalidad a la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO mientras se sigue adelantando labores para ubicar al señor NICOLAS BOLIVAR y comisiona para la materialización de su entrega al fiscal 41 seccional de la sede de buenaventura.

DECIMO OCTAVO: El día 25 de agosto de 2011, la Fiscalía Quinta Especializada de Buga – Valle, mediante Auto Interlocutorio Numero 0093 Resuelve: Inhibirse de

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

abrir investigación, en consecuencia, ejecutoriada la decisión proceder al Archivo Provisional.

DECIMO NOVENO: la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO recibió la embarcación DON EMILIO, en un estado de deterioro lamentable el día 15 de julio de 2010, muy diferente a como se encontraba en el momento en que fue incautada, ya que la factura prueba que fue elaborada en el mes de agosto del año 2002 y la incautación ocurrió en agosto de 2003 es decir solamente la tuvo consigo durante un año aproximadamente de lo cual también se llega a la conclusión que no podía estar en mal estado.

VIGESIMO: La señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO sufrió grandes pérdidas económicas por la incautación de dicha embarcación puesto que había celebrado un contrato de arrendamiento de maquinaria, el cual tuvo que incumplir y se vio en la obligación de cancelar el valor pactado a título de pena por el incumplimiento del contrato, y además de verse privada de su derecho de propiedad que incluye el uso y goce de la cosa, también tuvo que cancelar honorarios a diferentes abogados para salir del problema penal en el que se vio involucrada.

UNDECIMO PRIMERO: El día 6 de junio de 2012, se presentó solicitud de conciliación ante el procurador delegado ante lo contencioso administrativo, declarándose fallida la misma el día 19 de julio de 2012.

NORMAS VIOLADAS CON LA OCURRENCIA DEL HECHO ANTIJURÍDICO Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Los Entes demandados en el caso en cuestión, quebrantaron los Artículos 2, 6, 90 y 91 de la Constitución Nacional, y 140 del Código Contencioso Administrativo.

El Artículo 2 de la Carta prevé los fines esenciales del Estado entre los que se contempla el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la vigencia de un orden justo.

A su vez, el **inciso segundo** señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencia, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

El Artículo 6 de la Carta se refiere entre otros aspectos a la responsabilidad de las autoridades y servidores Públicos por infringir la Constitución y la Ley o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

El Artículo 90 de la Carta trae la cláusula general de responsabilidad de Estado cuando establece que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades Públicas.

De lo anterior se ha concluido, que nuestra carta organiza nuestro Estado, como un ente que se articula bajo los postulados de un Estado Social de Derecho, que requiere que sus agentes, entre quienes se encuentran todos los funcionarios públicos, ejerzan sus funciones dentro de un marco jurídico, sometiendo sus ejecutorias a la normatividad vigente. Es decir, que entre nosotros y los Servidores Públicos, existen competencias regladas y su proceder está regido por el principio de la legalidad.

Los entes demandados, han quebrantado estas disposiciones Constitucionales, lo cual se ha concretado en el hecho antijurídico ocurrido el día 22 de agosto del año 2003 en Jurisdicción del municipio de Buenaventura (Valle), lugar en donde incautaron la embarcación y la llevaron a instalaciones de las autoridades respectivas donde la dejaron en total abandono generando que se deteriorara totalmente ocasionando con ello grandes pérdidas materiales.

Como consecuencia de dicha retención el bien mueble no solo quedo deteriorado sino que además dejo de producir durante todo este lapso de tiempo.

Sin duda, en el presente caso la responsabilidad estatal se ve seriamente comprometida y al hacer un escueto análisis de ésta a fin de encuadrarla en alguno de los diferentes regímenes de responsabilidad desarrollados por la jurisprudencia y la doctrina nacional, se hace más evidente la existencia de la falla probada del servicio dentro del régimen de responsabilidad subjetiva, generadora de los perjuicios sufridos por el actor, teniendo de presente que la responsabilidad del Estado en la actualidad gira alrededor del concepto de daño antijurídico (artículo 90 C. N.)

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

Sin desconocer la facultad del Juez competente en los casos como el planteado, para encuadrar la responsabilidad estatal de los entes demandados en alguno de los diferentes regímenes sobre la responsabilidad estatal, prevaleciéndose del principio *iura novit curia*, consideramos que en el presente caso la responsabilidad del Estado se encuadra dentro del régimen de responsabilidad subjetiva.

De esta forma al demandado no le basta probar ausencia de culpa, sino que también es menester que establezca cual fue la causa del daño, y que esa causa le es extraña, es decir, le fue irresistible o imprevisible y jurídicamente ajena o exterior. La causa extraña puede ser una fuerza mayor, el hecho exclusivo de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero.

La falla probada del servicio originada en la responsabilidad subjetiva, en el caso *in examine* es más que evidente y el daño antijurídico es atribuible en su totalidad al Estado en cabeza de los entes demandados, los actores deben probar la culpa de la administración como elemento integrante de responsabilidad estatal, pues como se deduce de este régimen de responsabilidad, se debe demostrar la falla y el nexo de causalidad entre la falla y el daño efectivamente irrogado.

La falla en el servicio corresponde pues al régimen de responsabilidad subjetiva, donde predomina la culpa de la administración por extralimitación de funciones, retardo en el cumplimiento de obligaciones, obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa, o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado. Son entonces acciones u omisiones que se predicen de la administración y que, en su funcionamiento, resultan en cualquiera de aquellas irregularidades generadoras de daños imputables al estado.

Cada una de estas irregularidades tiene unas connotaciones que deben analizarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto; en el caso de retardo de la administración, ha reiterado la sección tercera del consejo de Estado que “Los elementos que perfilan la responsabilidad de la administración por falla administrativa derivada del retardo y de cuya concurrencia surge el deber de reparar los daños que se ocasionen, se pueden resumir en los siguientes: i) la existencia para la administración de un deber jurídico de actuar, es decir, la obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de ejercitar sus competencias y atribuciones en un plazo determinado por la propia ley o el reglamento, o en un tiempo razonable y determinable cuando se satisface el supuesto de hecho de las normas que regulan la actividad del órgano, acción con la cual se habría evitado los perjuicios, ii) el incumplimiento de esa obligación, es decir, la expedición tardía de un acto administrativo que finalice la actuación, por la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso la demora debe ser injustificada, pues el solo transcurso del tiempo o incumplimiento de los plazos procesales para resolver no genera automáticamente un derecho a la indemnización; iii) un daño antijurídico, esto es, la lesión real y evaluable económicamente de un derecho o de un bien jurídico protegido al interesado o a un grupo de ellos, que no están en el deber jurídico de soportar; y iv) la relación causal entre la demora (funcionamiento anormal del servicio) y el daño.

La jurisprudencia ha sido enfática al determinar que no todo retardo es causante de daño antijurídico, ya que no solo existen retardos justificados que pueden dar lugar al incumplimiento de las obligaciones del Estado en la oportunidad legal o que normalmente se espera para determinados procedimientos, sino que también necesariamente deben conjugarse los otros presupuestos de responsabilidad como el nexo causal, porque el daño finalmente causado puede no ser proveniente del retardo de la administración

En los casos de omisión de la administración, lo que se revela es una absoluta ausencia de acción o de funcionamiento de las agencias o entidades del Estado en el cumplimiento de sus funciones legalmente encomendadas y en detrimento de los asociados, cuando de esa omisión en la prestación de un servicio, el cumplimiento de una obligación contenida en la ley o en los reglamentos, resultan daños por la negligencia injustificada.

La jurisprudencia distingue entre omisiones laxas y omisiones en estricto sentido, refiriéndose las primeras a la negligencia u olvido en los deberes de cuidado, que de haberse cumplido pudieron haber evitado u resultado dañoso previsible. Las segundas se refieren al incumplimiento de un deber legal previamente establecido y que el Estado está en la obligación de ejecutar, resultando de su incumplimiento, igualmente, un resultado dañoso.

Conforme a esta posición, la responsabilidad por el daño antijurídico ocasionado a los actores, es atribuible exclusivamente a los entes demandados, dado que cuando se trata de bienes incautados, a partir del momento el Estado desconoce e incumple una obligación impuesta por la ley, cuyo deber es el manejo, custodia, control y administración de dichos bienes, por tanto el estado debe garantizar al afectado un proceso de administración eficiente y transparente, y en especial sobre aquellos bienes en los que no se había demostrado su origen viciado y que tienen que ser restituidos a sus dueños por orden judicial, el alto riesgo que corre el Estado y el deterioro de las finanzas por no haber sido conservados y administrados adecuadamente y de la cual se genera una responsabilidad por falla del servicio.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

Así las cosas, tanto en la pérdida, como detrimento de los bienes incautados, el Estado asume una posición de garante, en la cual a raíz de un no hacer, ha producido un resultado lesivo, pudiéndolo haber evitado, por ello lo decisivo en la responsabilidad por inactividad material no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino solo la virtualidad causal de la acción, que hubiera debido realizarse para evitar los perjuicios. Por lo que para que exista la obligación de indemnizar no se requiere una verdadera relación de causalidad naturalística entre la omisión y el daño, sino que basta que la administración hubiera podido evitarlo cuando se hallaba en posición de garante.

Está acreditado plenamente, que la embarcación DON EMILIO de propiedad de la señora RUTH PATRICIA MONROY fue incautada en buenas condiciones y que desde el momento mismo de la incautación de este bien el Estado paso a ser su garante y pudo tener el debido cuidado y mantenerlo en buenas condiciones a fin de que el bien no se deteriorara; es deber del Estado velar por que los lugares donde se almacenan dichos bienes cuenten con las medidas de seguridad necesarias para la conservación de los mismos, así como velar porque se realice un mantenimiento y productividad, y que el estado de las cosas no se altere significativamente, excepto el deterioro normal.

El Estado es responsable patrimonialmente por el deterioro y pérdida de los bienes incautados, toda vez que está prestando un servicio en forma defectuosa y le asiste al afectado derecho a reclamar y en su caso a ser indemnizado cuando se ha causado un daño.

En eventos similares al presente, como es el expuesto en el expediente 15262, del 18 de Junio de 2.008, Actor: Hernán Palacios Iragorri y otros, el Honorable Consejo de Estado se ha pronunciado en los siguientes términos:

“Considera la sala que el daño antijurídico sufrido por el señor Hernán Palacios es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional, porque la entidad incurrió en falla del servicio, habida consideración de que dispuso la retención del vehículo de propiedad del demandante y lo puso a disposición de la fiscalía para que adelantara la investigación pertinente, con base en un dictamen técnico que finalmente se reveló errado.

...

En consecuencia, dado que las irregularidades advertidas por los funcionarios de la entidad demandada resultaron infundadas, al punto que la fiscalía dispuso la entrega definitiva del vehículo a su legítimo adquirente, por considerar que le asistía plena certeza de la originalidad, se dispone que la entidad demandada indemnice los daños económicos causados al señor Hernán Palacios.”

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

A la señora RUTH PATRCIA MONROY MOLANO, se le impuso una carga al privarla de disfrutar de su Derecho de propiedad, uso y goce de sus bienes, cuando a un particular se le imponen cargas adicionales, mayores que al resto de ciudadanos y se le lesiona un derecho, se le está causando un daño antijurídico por parte del Agente del Estado y el perjuicio debe indemnizarse. En el caso concreto al ocasionarse un daño antijurídico a la Demandante, derivado de el descuido en el deber de cuidado que debía tener el estado sobre el bien, se le está imponiendo al primero obligaciones adicionales a las que normalmente deben soportar y para ellos se ha roto el Principio Constitucional de su derecho a la Igualdad ante las Cargas Públicas, derivándose que el Estado debe compensarles el equilibrio que les ha roto.

La tendencia moderna de derivar responsabilidad del Estado por violar el principio de Igualdad ante las Cargas Públicas, va dirigida a favorecer a los perjudicados, pretendiendo eliminar las trabas e inconvenientes que se venían presentando para obligar al Estado a indemnizar a los particulares que dañaba o lesionaba, se llegó a la conclusión que el Estado NO PUEDE DAÑAR Y QUEDAR EN IMPUNIDAD, pues se romperían los soportes del propio Estado de Derecho, fundamento innegable de la actual organización política generalizada.

Al igual que en el campo de la responsabilidad entre particulares, la tendencia actual es fijar más lo ojos en la víctima sin importar que exista culpa o falta de la administración. Por eso la finalidad de la actual responsabilidad administrativa, es la de RESTABLECER EL EQUILIBRIO ECONÓMICO ROTO, cuando se lesiona un patrimonio particular.

La forma como incautaron el bien, reteniéndolo por varios años y la actitud omisiva de las autoridades de no tener el debido cuidado con dicho bien, ubican la responsabilidad, al configurarse los siguientes elementos axiomáticos:

a) El hecho generador de la falla del servicio de la administración, plenamente establecido con los argumentos que anteceden: el deterioro y la mala conservación de la embarcación al dejarla en un abandono total, a la intemperie recibiendo sol y agua y sin realizarle ningún tipo de mantenimiento, reteniéndola sin tomar una decisión dentro de un tiempo razonable, configurando así un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

b) El daño cierto, la pérdida económica de la víctima, que implicó la lesión de su patrimonio, protegido y tutelado por el derecho: Un título de imputación, que para el

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

caso en estudio, lo constituye la falla en el servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que se encuadra dentro de la denominada responsabilidad subjetiva.

c) La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto: En el expediente obra prueba que el deterioro del bien se genero por el tiempo que transcurrió en los patios sin el debido cuidado, omitiendo la precaución de conservar el bien generando un resultado dañoso previsible.

Inequívocamente, la actitud de la administración fue la causa eficiente del daño sufrido; en el fondo, lo que se evidencia es la relación de causa entre la falla y el daño causado, como se prueba fehacientemente.

La jurisprudencia del honorable Consejo de Estado es abundante cuando, al desarrollar los principios atinentes a la responsabilidad pública, ha sentado:

*“.... De ahí que bien puede predicarse que la responsabilidad del Estado se desprende de la obligación que nace para éste de reparar los perjuicios causados, bien sea a la sociedad o a uno de sus miembros, como consecuencia del no cumplimiento, o del defectuoso cumplimiento o tardío cumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Constitución... Pero, se repite, la responsabilidad estatal surgirá siempre que las autoridades pudiendo y debiendo hacerlo para el caso específico dejen que se desconozcan los derechos a la vida, honra y **bienes** de las personas residentes en el país por parte de otras personas o cuando el mismo Estado vulnera tales derechos...”*

En sentencia Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Tercera, del veintisiete de Julio del año dos mil, Consejero Ponente: Dr German Rodriguez Villamizar, referencia: Expediente N°12168, se resume de manera contundente respecto de hechos similares, el manejo que se le debe dar a la responsabilidad del estado respecto de los bienes incautados, veamos:

“Del material probatorio infiere la Sala que en efecto al actor le fue decomisada la motonave referida y que la misma, al devolvérsela, si fue que así sucedió, estaba en las peores condiciones, destruida e inutilizable por los daños que sufrió al permanecer en el muelle naval de Buenaventura sin cuidado alguno, a la intemperie, dentro del agua y en completo abandono, a pesar de los oficios que el comandante naval enviara al juzgado instructora advirtiéndole sobre los serios daños en su estructura, así como sobre el hundimiento de la embarcación y la posibilidad de que pudieran resultarle más daños en la estructura. En las anteriores condiciones estima la sala que en el sub

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia

judice la inutilización de la embarcación aludida generó para la parte actora un daño antijurídico en cuanto que, si bien debía soportar las consecuencias y dificultades inherentes a un proceso de carácter penal por haberse encontrado en su motonave armas y elementos de uso privativo de las fuerzas militares, tal obligación no se extendía hasta tener que padecer la pérdida de su embarcación, con todas las secuelas que la misma le significaban. Le correspondía al estado a través de las autoridades judiciales que conocieron del proceso, procurar el mantenimiento y cuidado de los bienes incautados, obligándose a devolverle al procesado los mismos bienes y en las mismas condiciones que tenían al serle retenidos. Empero ninguno de los funcionarios judiciales asumió el cumplimiento de esa obligación de custodia y cuidado y sí, en cambio, hicieron caso omiso de las varias comunicaciones que el comandante del puesto naval les envió alertándolos sobre los daños ya sufridos por la embarcación y los que podían sobrevenir. Fue, pues, esa conducta omisiva y descuidada de las autoridades judiciales que conocieron del proceso y que tuvieron bajo su disposición la embarcación referida una falla del servicio que, a su vez, constituye el título de imputación al estado, del daño cuya reparación pretende el demandante. "

En reiteradas oportunidades el H. Consejo de Estado ha reconocido que hay derecho a la indemnización derivada del error jurisdiccional solamente cuando se trata de un fallo, una sentencia o una providencia definitiva, manifiesta y ostensiblemente ilegal, es decir abiertamente contraria a derecho; y lo ha diferenciado del "defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia", que se refiere a los eventos en que la administración de justicia no actúa, lo hace deficientemente, o incurre en un retardo injustificado al adoptar las decisiones que corresponda, omisiones o irregularidades que causan daño a las partes o a terceros, dejando claro que las obligaciones del Estado son relativas y que, en consecuencia, únicamente puede exigírsele lo que esté a su alcance, de acuerdo con los medios que dispone.

En relación con los daños causados por error judicial y por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ocasionado por ocupación de inmuebles e incautación de bienes por considerarse presuntamente ilícitos. Ha dicho la Sala de lo contencioso administrativo del consejo de estado, sección tercera, expediente: 22205 de 27 de enero de 2012, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Actor: José Jairo Lenis Giraldo y otros:

"Para la Sala es claro que, en el asunto sub examine, también se dan los presupuestos que configuran un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues la prueba documental y testimonial arrimada al proceso, a la cual se hará alusión más adelante, cuando se procede a la tasación de los perjuicios causados a los demandantes, deja evidencia que lo vehículos particulares de placas ALA-261 y BAY-

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia

582, de propiedad de los demandantes, los cuales permanecieron en los patios oficiales por orden de la Fiscalía General de la Nación, fueron restituidos por dicha entidad en avanzado estado de deterioro.

...

Como se dejó anotado, las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación y la conducta de dicha institución en cuanto al deterioro de los vehículos de servicio particular de propiedad de los demandantes fueron la causa del daño antijurídico que éstos debieron soportar: por consiguiente, el daño resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación a título de error judicial y de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”.

La responsabilidad nace a partir del hecho dañoso que lesiona un patrimonio ajeno, no precisamente por la acción u operatividad de éste, sino por la omisión e inoperancia en su deber de actuar y administrar de la mejor forma posible unos bienes que están bajo su custodia y cuidado, generando como consecuencia una inactividad material y formal de la administración, es decir, un incumplimiento por parte del estado con su deber de hacer.

En sentencia de 4 de febrero de 2010 del tribunal contencioso administrativo del Cauca, Expediente: 2001-1164-00, Magistrado Ponente: Carlos Hernando Jaramillo Delgado, Actor: Sigifredo Eutemio Villamarin Castro, Se expuso:

“ El daño consistió en la indisponibilidad del vehículo automotor que padeció el señor Villamarin, es decir, en no poder usar y gozar de su camión, situación esta que se enmarca en el ámbito del derecho a la propiedad, el cual es debidamente protegido por el ordenamiento jurídico colombiano. El daño se constituyó en daño antijurídico desde el momento en que la fiscalía de forma injustificada no observó los términos legales para hacer los pronunciamientos correspondientes, y junto con el Juzgado retardaron injustificada y excesivamente la resolución del incidente sobre la devolución del vehículo.

....

Anota la sala que los ciudadanos deben soportar ciertas cargas, como lo son los términos en que normalmente se desenvuelven los procesos judiciales o administrativos, pero no tienen por qué soportar la omisión de las autoridades en el incumplimiento de sus deberes, ni mucho menos los perjuicios que con esa omisión se les ocasionen, lo que ajustado al sub examine corresponde, por una parte, al deber que debía soportar el señor Sigifredo Eutemio Villamarin Castro de no disponer de su

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
Especializada en
*Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

vehículo mientras se solucionaba el incidente, pero por otra, el derecho que tiene de ser indemnizado por los perjuicios ocasionados con la inobservancia injustificada y excesiva de los términos por parte de las autoridades”.

De lo aportado a la presente demanda, se colige fácilmente que la lancha DON EMILIO de la señora RUTH PATRICA MONROY MOLANO era una embarcación que había adquirido tan solo un año antes de que fuera incautada por las autoridades, motivo por el cual se deduce que al momento de su aprehensión debió estar en un buen estado pues estaba relativamente nueva, así mismo es evidente que la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO siempre estuvo dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los móviles del presunto delito que se investigaba y desde un principio allego al proceso las pruebas de que dicha embarcación estaba dentro de la bodega objeto de la investigación únicamente bajo el contrato de aparcamiento lo que demostró fehacientemente con los recibos de pago por concepto de aparcamiento que allego al proceso.

Resulta desbordado el tiempo que tardo la fiscalía en investigar si la propietaria de la embarcación tenía nexos con los autores del punible y en retener la lancha escudada en una investigación que tardaron aproximadamente siete años en resolver, máxime cuando la **ley 600 del 2000** en su **artículo 64** reza: “los objetos puestos a disposición del funcionario, que no se requieran para la investigación o que no sean objeto material o instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución o que no se requieran a efectos de extinción de dominio, serán devueltos a quien le fueran incautados. Si se desconoce al dueño, poseedor o tenedor de los mismos y los objetos no son reclamados serán puestos a disposición de la autoridad competente encargada de adelantar los trámites respecto de los bienes vacantes o mostrencos.

El funcionario que esté conociendo de la actuación, de plano ordenara la devolución a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del objeto material o instrumentos del delito que sean de libre comercio o demuestre tener un mejor derecho sobre los mismos.

Los bienes que se encuentren vinculados a un proceso penal o que sin estarlo sean aprehendidos por las autoridades facultadas para ello, no podrán ser utilizados por estas y deberán ser puestos inmediatamente a ordenes de la fiscalía, la que podrá delegar su custodia en los particulares,

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en normas especiales”.

A la luz del este artículo se hace evidente que la embarcación DON EMILIO, no era un objeto por medio del cual se había materializado el delito, pues la señora RUTH

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

PATRICIA MONROY MOLANO comprobó a tiempo que esta únicamente bajo la figura de aparcamiento, y fue así que lo determinó la resolución de fecha 4 de junio de 2010 donde finalmente se dispone la entrega en provisionalidad de la lancha, porque se llegó a la conclusión que la lancha estaba allí por contrato de aparcamiento y que no tenía ningún vínculo con el punible ni con sus autores, decisión que se llevó a cabo de forma tardía pues se llegó a ella con los mismos fundamentos que se tenían desde los inicios de la incautación de dicha embarcación.

Sin embargo vale la pena aclarar que la falla no solo se genera por el tiempo que el bien estuvo retenido, pese a ser un tiempo desmedido y exagerado, sino que además la falla radica básicamente en la omisión por parte de la entidad estatal en el debido deber de cuidado, en su deber de conservar la lancha en buen estado y realizarle un adecuado mantenimiento, omitiendo el estado su deber de garante de dicho bien.

Para exonerarse de responsabilidad le corresponde a la entidad pública demandada demostrar que el hecho se produjo por fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo y determinante de un tercero, cosa que no ocurre en el caso bajo estudio, pues los hechos demuestran fehacientemente que el perjuicio en el patrimonio de la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, se originó por una causa distinta a las enunciadas anteriormente.

Es necesario aclarar que no existió la causal de exoneración denominada fuerza mayor puesto que esta se predica de un acontecimiento imprevisible que no deriva de la actividad en cuestión, sino que en este sentido viene de fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por las medidas de precaución que racionalmente eran de esperar. Es claro entonces que en el presente caso no se presenta ni fuerza mayor ni caso fortuito pues es previsible que si se deja una lancha en total abandono, a la intemperie, recibiendo sol y agua, sin un debido cuidado, ésta se va a deteriorar inevitablemente.

Tampoco concurre al presente caso la existencia de un tercero QUE EN FORMA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE, haya llevado a la entidad estatal a no tener el debido cuidado con un bien que estaba sobre su custodia y cuidado única y exclusivamente, y a adoptar una decisión de restituir el bien de forma tardía cuando el bien ya estaba prácticamente inservible.

Y Por último mucho menos se podría aducir Culpa o Hecho de la víctima, puesto que la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, siempre estuvo dispuesta a colaborar

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

con la justicia, desde un inicio se hizo presente en el proceso comprobando que era la propietaria de la embarcación, allegando los documentos y pruebas necesarias para demostrar que no tenía ningún vínculo con los autores del punible, y solicitando la restitución de su bien, sin dejarlo al abandono o al olvido como si lo hizo la entidad estatal.

PRUEBAS

Solicito respetuosamente a su señoría se sirva tener como pruebas los documentos que anexo con esta demanda, los que posteriormente se alleguen, y tener decretar y practicar como tales las que enseguida relaciono:

Documentales

1.1. DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN:

- 1.1.1. Factura de compra embarcación DON EMILIO.
- 1.1.2. Copia cedula de ciudadanía de la señora Ruth Patricia Monroy Molano.
- 1.1.3. Oficio del departamento de policía Valle, con fecha agosto 23 de 2003.
- 1.1.4. Copia de la misión de fecha 23 de agosto de 2003 proferida por la fiscalía 15 delegada ante los juzgados penales de circuito.
- 1.1.5. Poder conferido por la señora RUTH PATRCIA MONROY MOLANO al Dr. Aroldo de Jesús Amaya Chaverra
- 1.1.6. Escrito de la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO del día 29 de septiembre de 2005 donde solicita por medio de escrito la entrega definitiva de la motonave.
- 1.1.7. Poder conferido por la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO a la Dra. Carolina Velásquez
- 1.1.8. Resolución de Sustanciación del veintiséis de febrero de 2008 de la Fiscalía Quinta Especializada de Guadalajara de Buga
- 1.1.9. Solicitud de restitución de bienes del día marzo 12 de 2009, firmada por la Dra. Carolina Velásquez

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

- 1.1.10. Resolución del 1 de marzo de 2010 la unidad de fiscalías especializadas donde se niega la entrega de la embarcación "DON EMILIO".
- 1.1.11. Escrito del día 29 de marzo de 2010 y escrito del día 22 de abril de 2010, ambos del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, Comando Operativo Especial Buenaventura.
- 1.1.12. Diligencia de Inspección Judicial llevada a cabo por la fiscalía 41 delegada ante los juzgados penales de circuito de Buenaventura Valle, el día 26 de abril de 2010.
- 1.1.13. Poder conferido por la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO al Dr. Iván Darío Díaz.
- 1.1.14. Solicitud de Restitución de Bienes, firmada por el Dr. Iván Darío Díaz.
- 1.1.15. Resolución de 4 de junio de 2010 de la fiscalía donde se profiere la entrega provisional de La embarcación DON EMILIO.
- 1.1.16. Despacho Comisorio numero 018, del día 23 de junio de 2010
- 1.1.17. Auto Interlocutorio de 25 de agosto de 2011 de la fiscalía donde profiere resolución inhibitoria y procede al archivo provisional de la investigación.
- 1.1.18. Contrato de arrendamiento de maquinaria celebrado entre GERMAN GIOVANNI CHAMORRO y RUTH PATRICIA MONROY MOLANO.
- 1.1.19. Certificación de pago de honorarios de servicios profesionales del Dr. Iván Darío Díaz Naranjo.
- 1.1.20. Recibos de caja menor por concepto de pago de contrato de aparcamiento.
- 1.1.21. Fotografías embarcación DON EMILIO, que reposan en el expediente de la Fiscalía Quinta especializada de Buga.

1.2. PRUEBA TRASLADADA:

1.2.1. A la Fiscalía Quinta (5) especializada del municipio de Guadalajara de Buga (Valle), a fin de que remita al proceso copia auténtica del caso bajo Radicado No. 113981, Donde se adelantaba investigación por el supuesto punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el cual fue incautada la embarcación "DON EMILIO" de propiedad de la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO.

2. TESTIMONIALES:

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

2.1. Sírvase citar y hacer comparecer al señor GERMAN GIOVANNI CHAMORRO, mayor de edad, vecino y residente en el municipio de Cali (Valle), para lo cual solicito se libre despacho comisorio a dicho municipio, los cuales declararan sobre el siguiente interrogatorio además de los generales de Ley:

- a) Si conocía a la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO y por qué razón.
- b) Si tiene conocimiento de la incautación de la embarcación "DON EMILIO" y porqué.
- c) Diga si es cierto que la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO había celebrado un contrato de arrendamiento sobre dicha embarcación antes de que fuera incautada con usted.
- d) Diga si la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO debió cancelar a usted la clausula por incumplimiento que habían pactado en dicho contrato y por qué valor.
- e) Diga si sabe que otras pérdidas materiales sufrió la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, como consecuencia de la incautación de la nombrada embarcación.

Me reservo el derecho de ampliar este interrogatorio.

2.2. Sírvase citar y hacer comparecer a los señores JHON JAIRO ANGULO DIAZ y GILBERTO MONROY, mayores de edad, vecinos y residentes en el municipio de Cali (Valle), para lo cual solicito se libre despacho comisorio a dicho municipio, los cuales declararan sobre el siguiente interrogatorio además de los generales de Ley:

- a) Si conoce de vista, trato y comunicación a la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, asi como su núcleo familiar.
- b) Dirán los testigos si están enterados sobre la incautación que la fiscalía le hizo a la embarcación de propiedad de la señora RUTH PATRICIA MONROY
- c) Qué digan los testigos si tuvieron conocimiento del estado en que le fue devuelta la embarcación "DON EMILIO" a la señora RUTH PATRICIA MONROY y en qué estado se encontraba antes de ser incautada.
- d) Que respondan los testigos que perdida material sufrió la señora RUTH PATRICIA MONROY a raíz de la incautación de la embarcación.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

e) Que digan los testigos si la señora RUTH PATRICIA MONROY se noto afligida y preocupada por las pérdidas materiales que sufrió con la incautación de la embarcación, y como era su estado anímico.

Me reservo el derecho de ampliar este interrogatorio.

COMPETENCIA Y CUANTIA

Es competente en primera instancia este despacho judicial, por la naturaleza de la acción y del hecho, por razón del territorio y por la cuantía de las pretensiones (artículo 155 del C.P.A.C.A.), la cual se determina de la manera siguiente:

ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

1. PERJUICIOS MORALES

Constituido por la angustia, el desespero causados a la demandante a raíz de la incautación del bien mueble consistente en la embarcación DON EMILIO, con lo cual sufrió una afectación económica que le genero problemas personales a raíz del incumplimiento del contrato que ya había celebrado y el cual se había comprometido a cumplir, además de la angustia generada por la clausula penal por incumplimiento de la cual se tuvo que hacer responsable y que le ocasiono un desequilibrio económico que afecto su núcleo familiar.

Tales perjuicios dada su complejidad, subjetividad y carencia de medios exactos para su medición, han de ser tasados por su señoría, en atención a su justo y proporcional juicio; sin embargo aun a sabiendas de que no es posible cuantificar la cantidad de dolor, angustia o desespero que en la esfera personal sufre una persona por la retención de un bien que le generaba ingresos los cuales dejo de percibir y que además sufrió pérdidas que no estaban dentro de su presupuesto, con el debido respeto nos permitimos poner a su consideración la siguiente tasación de perjuicios morales, con fundamento en la angustia, desespero que padeció la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO. El desastre emocional, sicológico y económico que toleran quien aquí demanda, ha sido y será probado fehacientemente con las pruebas allegadas y solicitadas:

Para la Señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, en su calidad de propietaria de la embarcación DON EMILIO

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia

TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (30 S.M.L.M.V)

2. PERJUICIOS MATERIALES

2.1 LUCRO CESANTE:

- **PRESENTE**

Constituye el valor de la indemnización de perjuicios causada, debido a los ingresos dejados de percibir por la incautación del bien mueble, puesto que entre la señora RUTH PATRICIA MONROY MOLANO y el señor GERMAN GEOVANNY CHAMORRO celebraron un contrato de arrendamiento de maquinaria donde este último se comprometía a pagar un canon de dos millones quinientos (\$ 2.500.000)mensual y dicho contrato fue pactado con un termino de duración de 60 meses, es decir 5 años contados a partir del 15 de septiembre del año 2003, cuya cuantificación total seria:

\$ 2.500.000 Canon de arrendamiento mensual (x) 60 meses = \$ 150.000.000

- **FUTURO**

Mas el análisis de los años que no están dentro de dicho contrato pero que sin embargo la embarcación continuaba en las sedes de las autoridades policivas de Buenaventura dejando de producir, cuando probablemente de no ocurrir el hecho dañino cual es la incautación, bien hubiese podido seguir produciendo rentabilidad bien sea con el mismo contrato, o ya sea con uno de igual o mejor condición económica, máxime si se tiene en cuenta q en la medida que transcurren los años aumenta el valor adquisitivo de la moneda, sin embargo haremos el análisis bajo la hipótesis de que el contrato ya celebrado se hubiese prorrogado que es la probabilidad más alta de haber transcurrido a la realidad.

Seria desde el 15 de septiembre de 2008 hasta el 15 de julio de 2010 fecha en la que se hizo entrega material de la mencionada embarcación.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia

\$ 2.500.000 Canon de arrendamiento mensual (x) 22 meses = \$ 55.000.000

Total indemnización debida: doscientos cinco millones de pesos (\$205.000.000)

2.2 DAÑO EMERGENTE:

Conformado por los gastos de reparación en que ha tenido que incurrir para restaurar el bien mueble consistente en la embarcación DON EMILIO, y todos los gastos que ha generado la incautación del mueble.

- **PRESENTE:**

Clausula penal por incumplimiento del contrato de arrendamiento de maquinaria
\$15.000.000

Pago Honorarios por prestación de servicios profesionales al Dr. Iván Darío Díaz Naranjo
\$ 8.000.000

- **FUTURO:**

Cotización reparación de embarcación
\$ 3.000.000

Total daño emergente presente y futuro:
\$ 26.000.000

Son veintiséis millones de pesos moneda legal.

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES:
\$231.000.000

Son doscientos treinta y un millones de pesos.

JURAMENTO ESTIMATORIO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la cuantía estimada en el acápite anterior corresponde a la realidad y al objeto del daño de conformidad con el artículo 206 del C.G.P.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

DERECHO

Me fundamento para esta acción en los artículos 2, 6, 58, 90 y 122 y demás Normas concordantes de la Constitución Nacional, 140, 162 a 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás disposiciones concordantes.

ANEXOS

- Los documentos enunciados como pruebas
- El poder a mí conferido
- Copia de la demanda para el archivo
- Copia de la demanda y sus anexos para el traslado
- Copia de la demanda y sus anexos para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
- Copia de la demanda en medio magnético (CD)

NOTIFICACIONES

DESIGNACION DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

La parte demandante está conformada así:

Demandantes RUTH PATRICIA MONROY MOLANO, a quien se puede ubicar en la Diagonal 51 No. 5 – 31 Oeste, Barrio Belisario Caicedo.

La apoderada de la parte demandante ANA YENSY SALGADO BEDOYA, residente en la Calle 60 No. 49 – 04 Barrio Obrero de Sevilla (Valle).

Correo electrónico: brissa105@hotmail.com

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

La parte demandada es:

LA NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACION entes que se pueden ubicar en sus respectivas sedes de Bogotá D.C. –Diagonal 22B No. 52 – 01.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Calle 70 No. 4 – 60 Bogotá D.C.

Atentamente,

ANA YENSY SALGADO BEDOYA
C.C. No. 38.756.340 expedida en Sevilla (Valle)
T.P. No.168.031 del C. S. de la J.

Señores

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada
*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUGA
E.S.D.

DEMANDANTE: RUTH PATRICIA MONROY MOLANO

DEMANDADO: LA NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION

RADICACION: 2012-00021

REFERENCIA: Corrección demanda de reparación directa ajustada a la nueva normatividad

A continuación subsano la demanda de la siguiente manera:

1. De conformidad con el Artículo 308 C.P.A.C.A. corrijo la normatividad ajustada al nuevo código C.P.A.C.A. por razón de la vigencia que cobija esta demanda.
2. Respecto de los hechos hago claridad en el hecho con numeración “vigésimo” de la fecha en la cual se hizo la entrega material de la embarcación DON EMILIO correspondiente al 15 de julio de 2010.
3. Atendiendo lo que dispone el artículo 166 del C.P.A.C.A. en cuanto a los anexos allego a este despacho 5 copias físicas incluyendo la copia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y una copia en medio magnético.
4. En cuanto al juramento estimatorio previsto en el artículo 206 del C.P.G. lo hago respecto de las cuantías estimadas de los perjuicios patrimoniales causados a raíz del hecho dañoso.

Cordialmente,

ANA YENSY SALGADO BEDOYA
C.C. 38.756.340 de Sevilla
T.P. 168.031 del C.S.J.

Ana Yensy Salgado Bedoya

Abogada

*Especializada en
Derecho Administrativo U. Externado de
Colombia*

Gestión Jurídica